

informativo

campesino

N° 249 | ABRIL | MAYO | JUNIO 2012



en esta edición



MASIVAS PROTESTAS ANTE GOLPE PARLAMENTARIO



RECUPERAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ES FUNDAMENTAL



MUEREN ONCE SIN TIERRAS EN CURUGUATY



LAMENTAN MUERTE DE CAMPESINOS EN CURUGUATY



NUEVA ADMINISTRACION DE INDERT ASEGURA REFORMA AGRARIA



REINICIO DE ACTIVIDADES EN CAZAPA



- nuestra opinión
QUIEBRE INSTITUCIONAL TRAS
MASACRE EN CURUGUATY
pág. 4
- entrevista
ENTREVISTA A JULIO ARÉVALOS,
dirigente del asentamiento 11 de
mayo
pág. 7
- organizaciones campesinas
LAMENTAN MUERTE DE
CAMPESINOS EN CURUGUATY
pág. 9
- manifestaciones
MASIVAS PROTESTA ANTE GOLPE
PARLAMENTARIO
pág. 14
- conflictos de tierra
MUEREN ONCE SIN TIERRAS EN
CURUGUATY
pág. 17
- reforma agraria integral
NUEVA ADMINISTRACION DE INDERT
ASEGURA REFORMA AGRARIA
pág. 21
- capacitaciones
REINICIO DE ACTIVIDADES EN
CAAZAPA
Pág. 25

CDE
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
Y ESTUDIOS

editor
CDE-Área Sociogremial

responsable
Quintín Riquelme

consejo de redacción
Quintín Riquelme
Elsy Vera
Justino Romero

foto de tapa
Archivo CDE

fuentes consultadas
ABC Color y Última Hora

diagramación
Justino Romero

impresión
SV Servicios Gráficos

La edición de esta revista se
realiza gracias a:

CAFOD
just one world

El contenido es de
responsabilidad exclusiva
de los/as autores/as y no
compromete a la institución
que colabora en su
elaboración y publicación.

quiebre institucional tras masacre en curuguayaty



El 22 de junio, el congreso paraguayo con un juicio político interrumpió el gobierno de Fernando Lugo, que debía durar hasta agosto del 2013. La gestión del gobierno durante este período tuvo avances importantes en muchos ámbitos de la vida social y política del país. Sin embargo, en otras esferas, no ha logrado resolver varios de los problemas calificados como graves, Reforma Agraria, pobreza, medio ambiente, entre otros, y que debieron haber sido priorizados por el gobierno. Afectado por una correlación de fuerzas totalmente desigual en el

Congreso, el gobierno tuvo que resignarse al incumplimiento de éstas y otras promesas electorales.

La masacre de Curuguayaty, departamento de Canindeyú, ocurrido el 15 de junio, en una ocupación de tierra, donde fallecieron 6 policías y 11 campesinos y utilizado por los parlamentarios como detonante del juicio político, puede considerarse un hecho insólito e inesperado. Desde la caída de la dictadura de Stronessner en febrero de 1989, el país fue escenario de innumerables conflictos de tierra, de desalojos violentos,

de asesinatos de campesinos, de apresamientos masivos, de imputación a los y a las dirigentes, pero, un evento como el de Curuguayaty, jamás ocurrió, lo que llama poderosamente la atención. Por más vejamen que sufrían los y las ocupantes de tierras, jamás llegaron a un enfrentamiento con la policía con armas de fuego. Este hecho lamentable sucedió además en un momento de mucha tensión política por los acontecimientos previos. El rechazo de la ciudadanía a la solicitud de aumento de 50 millones de dólares para el Tribunal de Justicia Electoral

por parte de los parlamentarios para sus operadores políticos, en la que éstos fueron acusados de dipuchorros y senarratas, además del pedido de desbloqueo de las listas sábanas.

Otro hecho no menor fue la presión ejercida por los campesinos contra las tierras malhabidas. La existencia real de las tierras malhabidas fue descubierta infraganti en Curuguaty, la Empresa Campos Morombi SA, del ex senador y político colorado, Blas N. Riquelme donde ocurrió la masacre, no estaban inscritas a nombre de la empresa. Eran tierras del Estado, pero apropiadas ilegalmente por la empresa. Con este caso, el gobierno tenía la brillante oportunidad de demostrar la existencia real de esas tierras y de recuperarlas y esta acción podía constituirse en un precedente peligroso para los detentores de las tierras malhabidas.

La otra acción importante emprendida por las organizaciones campesinas es contra la expansión sojera que utiliza semillas transgénicas y agrotóxicos, provocando la expulsión de los y las campesinos/as, la contaminación del medio ambiente y la dependencia hacia las empresas dueñas de dichas semillas. Con estas acciones, las organizaciones campesinas estaban atacando la principal fuente de acumulación de un

sector importante de la clase dominante.

Todos estos hechos eran un mal presagio, el desprestigio de la clase política tradicional, de sus representantes en el parlamento, el avance de la lucha campesina por recuperar tierras de los ganaderos y de los sojeros, la creciente visualización por parte de la ciudadanía de sus derechos, de polarización social y política entre grupos de izquierda y de derecha que antes se ocultaba, eran motivos preocupantes para la derecha.

Con este quiebre del proceso democrático, los grupos económicos representados por los sojeros, por las multinacionales de la producción, por los ganaderos y por la mafia en general, salieron claramente favorecidos.

Los pequeños avances que se fueron dando a favor de la población campesina son interrumpidos y tomará un rumbo incierto hasta las próximas elecciones generales del 2013. Una de las iniciativas interesantes fue la búsqueda de un reordenamiento territorial a través de un proceso de regulación de las tierras estatales para el 2012. Este emprendimiento fue una de las acciones más destacadas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT). La decisión de recuperar las tierras del Estado en vez de com-

prarlas, fue una audaz estrategia para evitar las trabas en el Parlamento. Sin embargo, no produjo los resultados deseados y por lo tanto no se convirtió en una salida muy factible. El gobierno en su intento por depurar el ente agrario, adquirió un Sistema Integrado de Información, a fin de especificar con exactitud las propiedades, superficies, titulaciones otorgadas por el INDERT. A estas acciones se sumó la publicación de una lista de 79 propiedades adjudicadas irregularmente en la época de la dictadura. El informe identificó 25.649 hectáreas de tierras malhabidas en Alto Paraná y la zona de Ñacunday.

Estas revelaciones oficiales causaron revuelo en distintos sectores. Si bien el Informe de la Comisión Verdad y Justicia realizado en el año 2008 revelaba la existencia de 7.851.295 ha. de tierras malhabidas, pareciera que el INDERT estaba tomando impulso para iniciar el proceso de recuperación de dichas tierras. Esta iniciativa tropezó con la constatación efectiva de que muchas de estas propiedades fueron arrendadas por los propios funcionarios del INDERT a empresarios sojeros. Pese a las acciones positivas emprendidas en estos años, la corrupción interna no pudo ser saneada por ninguna administración que al parecer siguió nutriéndose del apar-

to estatal muy fuertemente.

La implementación del Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar (PPA), fue otra iniciativa interesante. El PPA fue uno de los programas emblemáticos enmarcados dentro de la Política de Desarrollo Social Paraguay para Todos y Todas 2010-2020, ejecutado por el Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). A un año de su implementación se dieron pequeños pasos hacia el apoyo a la Agricultura Familiar Campesina que ahora pasa a formar parte de la incertidumbre como la mayoría de los programas sociales estatales. Cabe resaltar que uno de los aspectos más positivos de la implementación del PPA fue la presencia del Estado en las comunidades, a través del apoyo técnico permanente que en años anteriores no es-

taba visible para los/as pequeños/as productores/as.

El sistema de trabajo con las familias campesinas abría la posibilidad de mayor participación social, con el reconocimiento de las organizaciones sociales que ayudaba a su fortalecimiento. Esta nueva perspectiva de trabajo generaba contradicciones dentro del mismo MAG, pues exigía una formación social de técnicos/as quienes realizaban el trabajo de campo. La práctica de este enfoque chocaba con el viejo estilo de asistencia técnica y generaba resistencia en algunos/as funcionarios/as. Entre las principales debilidades observadas al Programa se observa la falta de retroalimentación sobre el trabajo en terreno, debido al sistema de control administrativo que se desarrollaba. Por otra parte, los acuerdos interinstitucionales no se reflejaban en acciones concretas, teniendo en

cuenta que el PPA se articulaba con otros programas sociales a instancias del Gabinete Social.

El PPA tenía el gran desafío de posicionarse y que sus beneficiarios/as se empoderen del mismo para instalar un proceso de continuidad para el próximo gobierno en el 2013. Sin embargo, el abrupto cambio luego del juicio político hizo que el presente y el futuro de este proceso fuera interrumpido sin muchas esperanzas de sobrevivir para el próximo periodo.

La interrupción del proceso de cambio iniciado en el 2008, puso de manifiesto, por un lado, la fragilidad política de la base que sustentó dicho proceso, y por otro, la no superación de varios vicios del pasado como la corrupción, el escaso control sobre los programas sociales, la práctica prebendaria en algunos casos, opacaron muchas de las acciones gubernamentales. A pesar de estas dificultades, el proceso iniciado produjo giros importantes como el aumento de la participación social, mayor conciencia de la ciudadanía sobre sus derechos y una reducción de la pobreza que comenzaba a darse producto quizás de los programas sociales implementados.



Entrevista a Julio Arévalos - Dirigente del asentamiento 11 de mayo

recuperar los programas sociales es fundamental

El asentamiento 11 de Mayo, distrito de San Juan Nepomuceno de Caazapá, es una de las comunidades en la que se viene trabajando a través del Programa de Fortalecimiento e incidencia de las organizaciones campesinas. En el segundo año del Programa se reanudó los trabajos en la zona donde articulan CEPAG, DECIDAMOS y CDE. Para conocer un poco más sobre el asentamiento y del proceso de trabajo que viene realizando en el lugar, conversamos con Julio Arévalos, dirigente de la tercera Línea de la comunidad.



Recuperar los programas sociales está en nuestras manos

¿Podes comentarnos de la historia del asentamiento y de la organización?

Hace casi 10 años que estamos asentados acá en 11 de Mayo, empezamos a organizarnos una comunidad de la tercera línea, donde viven unas 31 familias. En algunos lotes están dos familias, inclusive hasta tres familias por lotes. La necesidad primordial acá es el agua potable, escuela, salud, educación. Hasta ahora no encontramos ninguna salida aquí en el asentamiento y por ese motivo recurrimos gobierno para ver si no cubre con nosotros un poco la responsabilidad de contar con agua y demás, tenemos muchos niños. Somos alrededor de 200 familias que estamos sin

agua, sin escuelas. O sea que las necesidades más urgentes son agua, educación y salud.

¿Cómo conquistaron este lugar?

Fue a través de una lucha constante que tuvimos, una lucha de 4 años para conquistar este lugar la ocupamos, salimos de vuelta. Dos veces hicimos la ocupación y nos desalojaron. El 11 de mayo de 2002 se conquistó este lugar. Dicen que se había vendido al INDERT y en base a eso se distribuyó a nosotros, se loteo para nosotros.

¿Cuántas hectáreas tiene en total?

En total son 3.500 hectáreas

de lotes hay acá, también tenemos parte que es campo comunal que no está loteado.

¿Quién era el propietario anteriormente?

Lo que tengo conocimiento de que tenía un presta nombre, que era un tal Burró pero ya no identifico quien era el propietario real.

¿Cómo organización, cómo vieron el caso Curuguaty?

Comentamos y vimos que fue una excusa para sacarle a Lugo como presidente, así entendemos nosotros. Le pusieron nomás como responsable del hecho para desplazarle del gobierno.

¿Y qué opinan del juicio político?

Vimos que no es claro lo que sucede en nuestro país, no es transparente, no se dio un informe exacto de las cosas, eso es lo que pudimos notar.

¿Ustedes sientan el efecto del cambio de gobierno?

La situación cambió totalmente comparado con el anterior gobierno. Justamente ahora con Tekoporã, que era un programa que aportaba un poquito a la gente más necesitada, ahora ya no se da, ya venció el plazo para la entrega. Lo que sabemos es que aunque esté el dinero no pueden dar, la plata que se desembolsó para la gente ni eso se puede dar y entonces vamos peor que antes. Antes había un programa de gobierno para los pobres y ahora con este nuevo gobierno, no hay ningún plan para los campesinos, solamente dan excusas y excusas y así vamos.

En salud, se nota el cambio?

En cuanto a salud, quedó paralizado, se paralizó totalmente. Ahora se cobra de vuelta las consultas, análisis, todo vuelven a cobrar.

¿Y la atención primaria de salud que tienen aquí?

Y es algo provisorio que tenemos aquí, como para

acompañar a los pobres, pero no podemos culpar a los que trabajan allí. Esta es una cuestión de gobierno para que funcione correctamente, falta apoyo del gobierno. Falta voluntad por parte del gobierno para poder trabajar bien en estos centros de salud que tenemos. Ahora está totalmente paralizado, dicen que va haber consultas médicas, pero se quiere cobrar esas consultas. La gente siente que empeoró las cosas, ahora mismo ya se está viendo como van las cosas y suponiendo que suba como presidente, porque ahora esta provisoriamente nomás Franco.

¿Qué expectativas tienen sobre las elecciones del 2013?

La gente comenta mientras trabaja en la chacra, tomando tereré, que tenemos que defender esto nosotros, tenemos que volver a traer ese cambio que tuvimos, que tenemos que tener de vuelta en nuestras manos, depende totalmente de nosotros. Si es que realmente existe la ley, vamos a votar para traer de vuelta a nuestras manos el programa que el gobierno nos dio antes, eso queremos recuperar otra vez.

¿Es decir con el proceso de cambio que hubo anteriormente se mejoró un poco?

Sí, ahora se nota que está

más fea la situación comparando con años anteriores. En el anterior gobierno si cuestionábamos conseguíamos nuestras demandas, encontrábamos ese camino para conseguir, pero ahora no hay ninguna apertura, no se puede encaminar nada.

¿Cómo ven el trabajo que se viene encaminando en forma conjunta con CEPAG, DECIDAMOS Y CDE?

Nosotros no sabemos cómo agradecerles por el gran apoyo que recibimos de parte de ustedes, porque gracias a eso pudimos conocer cosas que nunca vimos, escuchar cosas que nunca antes habíamos escuchado. Nos acompañan para hacer las gestiones que no podíamos hacer antes, ahora estamos haciendo con ellos. Agradecemos muchos a todas las instituciones, por el espacio para conversar y analizar cada vez que nos encontramos.

¿Qué sugerencias tenés para estas instituciones para mejorar el programa?

Que nos acompañe, que se preocupen de nuestras demandas, que nos acompañen para encaminar y concretar los proyectos que presentamos. Por lo menos para alcanzar un 30% o 40% de lo que solicitamos a las autoridades.

lamentan muerte de campesinos en curuguay

Las organizaciones campesinas repudiaron y lamentaron la muerte de 11 campesinos en el enfrentamiento con policías en Campos Mborombí, Curuguay. Así mismo exigieron el esclarecimiento del hecho y la recuperación de las tierras del Estado. Igualmente rechazaron la destitución de Fernando Lugo a través del juicio político realizado por el congreso. A esta indignación se sumó la detención de Eulalio López, uno de los dirigentes de la LNC, que fue calificado por las organizaciones sociales como inicio de una persecución contra la organización, ligada a Lugo.



ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL ALTO PARANÁ (ASAGRAPA)

El dirigente de ASAGRAPA, Gerónimo Arévalos, productor de Minga Porã (Alto Paraná) fue ganador del premio Golden Butterfly, de Amnistía Internacional, y protagonizó un documental que trata sobre la conflictiva relación que llevan con los grandes productores de soja, principalmente por el uso de químicos. "Es necesario cambiar la situación en el campo. Controlar el uso de pesticidas y fortalecer las comunidades conformada por pequeños agricultores, de lo contrario el problema será más grave en los grandes

centros urbanos de la ciudad", mencionó Arévalos. Gerónimo es dueño de una finca de 4 hectáreas de tierra, ya que una hectárea la donó para la sede de la escuela pública existente en su comunidad. UH 16.04.12 País.

MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (MCNOC)

La MCNOC denunció un violento desalojo, con quema de viviendas y una escuela, en el asentamiento 13 de Mayo, ubicado en la compañía rural de Triunfo km 64, distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa. El procedimiento fis-

cal-policial fue dirigido por los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Rodrigo Vergara. Por su parte, el fiscal Pedotti rechazó las acusaciones y aseguró que el procedimiento se realizó en una propiedad de la familia Cano Ortiz, en la zona de Tomás Romero Pereira. Luis Fernando Cano Ricciardi afirmó que la propiedad es de su familia desde 1979 y que fue adjudicada a través de la reforma agraria. Tiene 842 hectáreas, de las cuales 150 hectáreas se encuentran ocupadas desde el 1 de abril. El conflicto entre los campesinos y la familia Cano Ricciardi se remonta a unos 10 años, cuando los sin tierras se instalaron en un predio de 800 Ha. Esta finca

fue denunciada como tierra malhabida ante la Procuraduría General de la República, que solicitó la nulidad de título al Poder Judicial, pero el juez Silvino Delvalle señaló como válido el documento. La familia Cano sostiene que las tierras fueron adquiridas legalmente, pero los campesinos indican que son empleadas con fines especulativos, porque se alquila la chacra a productores extranjeros de soja. ABC 27.05.12 Interior.

La MCNOC se pronunció en contra de la amenaza de corte de rutas para reclamar el fin de ocupaciones a propiedades privadas, promovido por empresarios. "Repudiamos y rechazamos la convocatoria de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), denominada tractorazo, cuyo propósito es profundizar el plan de transgenización de la producción agrícola, cuya consecuencia será el avance de la descampesinización y más dependencia y la pérdida de las semillas nativas, que serán desplazadas por las semillas transgénicas. Esto generará como resultado mayor dependencia de las empresas transnacionales para el desarrollo de la producción", sostiene el comunicado emitido por MCNOC. Según la CAP, actualmente existen más de 100 ocupaciones en el Departamento de Caaguazú y 12 órdenes de desalojo que

no son ejecutadas por la Policía Nacional. De ahí que el gremio propone sacar los tractores a la ruta como forma de protesta ante la inoperancia de la autoridades. UH 30.05.12 Economía.

Momentos de mucho dolor se vivieron durante el velatorio colectivo, que reunió a unas 300 personas en el oratorio de Santa Luisa, en la colonia Yvy Pytã, donde se encontraba los restos de siete de los 11 campesinos muertos en la propiedad de Blas N. Riquelme. El dirigente campesino Luis Aguayo, uno de los que hablaron durante el velatorio colectivo, indicó que el Gobierno no tiene intención de solucionar el problema de tierras, que derivó en la masacre. Expresó que los tres poderes del Estado son culpables del acribillamiento de los campesinos y que no toman un interés institucional para presentar una propuesta como gobierno. "Estamos hablando del asesinato de 17 compatriotas, donde hubo ajusticiamiento, y el presidente, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de brindar informaciones detalladas del porqué se tomó esa medida", enfatizó. Aguayo anunció una lucha tenaz, "ahora más que nunca", hasta conseguir la conquista de las tierras que posee Blas N. Riquelme, donde ocurrió la masacre, en honor a los caídos y sus familias huérfanas. ABC 19.06.12 Política/

UH 19.06.12 Política.

LIGA NACIONAL DE CARPEROS (LNC)

La LNC junto con otras organizaciones, decidió reestructurar su plan de ocupaciones y medidas de fuerza, y declarar como medida de urgencia asistir a sus compañeros que siguen heridos u ocultos en los montes de la propiedad de Blas N. Riquelme, en Curuguaty, departamento de Canindeyú. En plenaria, el líder campesino José Rodríguez, denunció la ejecución de otras tres personas más en el campo de Morombí por parte de policías que se encontraban buscando más heridos en el terreno, según testimoniaron familiares de los mismos. También sostuvo que le informaron que se someten a torturas a los detenidos en la comisaría de Curuguaty. Rodríguez lamentó la salida del ex ministro del Interior, Carlos Filizzola, como consecuencia del enfrentamiento entre policías y carperos. Calificó como nefasta la designación de Rubén Candia Amarilla como nuevo titular de la cartera y lo acusó de ser un represor de las organizaciones sociales. Culpó al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial por no responder a tiempo las necesidades de los labriegos de la zona y así evitar la masacre que ocurrió. Se decidió además llevar adelante

una gran movilización en varios puntos del país para sensibilizar a las autoridades de las necesidades del campesinado y otros sectores menos favorecidos y reclamar por la desgracia ocurrida en Curuguaty. UH 17.06.12 Política.

Un sector denominado Fuerza de Integración Popular, que está liderado por el dirigente carpero José Rodríguez, aseguró que la masacre entre campesinos y policías, en Curuguaty, se trata de un auto atentado y un montaje de las fuerzas públicas. Atanasio Galeano, secretario general de la organización, alegó que recibieron información sobre la existencia de más de 20 campesinos muertos y la misma cantidad de desaparecidos. Dijo que muchos de ellos fueron ejecutados. Desacreditó la versión de que los uniformados que fueron ultimados ingresaron desarmados al lugar, y que supuestamente los mismos iniciaron los disparos. Emitieron un comunicado en el que repudiaron la falta de voluntad política por parte del presidente Fernando Lugo. Reclamaron al mismo que no cumplió su promesa electoral sobre la reforma agraria. También cuestionaron "la actitud criminal de los personajes del Partido Colorado". Condenaron al Poder Judicial y al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Acusan de protección a fiscales de la zona. En el documento, ma-

nifestaron su preocupación por la designación de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior. Alegaron que el mismo fue entrenado por Colombia en técnicas de terrorismo de Estado. Exigieron la restitución de las tierras usurpadas y alertaron a la ciudadanía para una convocatoria a una movilización masiva a nivel nacional. UH 19.06.12 Política.

MOVIMIENTO AGRARIO Y POPULAR (MAP)

Un grupo de organizaciones campesinas y estudiantiles rechazó la designación del ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla como nuevo ministro del Interior. Emitieron un comunicado en el que manifiestan su desacuerdo con la decisión del presidente Fernando Lugo. Jorge Galeano, referente del MAP, consideró que representa la implementación y la profundización del sistema represivo conocido como "plan Colombia en Paraguay", señaló el dirigente. Las organizaciones insisten en la recuperación de las tierras malhabidas. "El desalojado tiene que ser Blas N. Riquelme y no los campesinos paraguayos", manifiesta Galeano. Sostuvo que no se trata de una propiedad privada sino del Estado paraguayo, de acuerdo a los informes que remitió el INDERT a la Cámara de Diputados. UH 17.06.12 Política.

COORDINADORA DE SIN TIERRAS GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA

La coordinadora de sin tierras, Gaspar Rodríguez de Francia emitió un comunicado en el que advierte que la violencia en el país aumentará si es que el Gobierno no da respuestas a los reclamos de "los más desposeídos en el campo". "La lucha por la tierra va a seguir. Existen miles de campesinos abandonados y sin un pedazo de tierra, la situación va empeorar, la desesperación y la falta de respuestas a los reclamos es lo que lleva a la violencia", dice el documento que lleva la firma del líder de dicho grupo, Dalmacio Miranda. No obstante, el comunicado expresó que dicho sector no utiliza la violencia para exigir sus reivindicaciones. Dalmacio dijo al respecto que el presidente Lugo debe entregar tierras a los campesinos para que pueda parar la ola de violencia generada por las necesidades crecientes de los labriegos. Dicha coordinadora activa en el Departamento de San Pedro, en la zona de Tacuatí Poty, del distrito de Tacuatí. En febrero pasado sin tierras pertenecientes a este grupo ocuparon una propiedad de 260 hectáreas perteneciente al brasileño Edemilson Domínguez, ubicada en la calle 20 de Julio de este distrito. Una comitiva fiscal policial realizó el desalojo de esa pro-

piedad el pasado 8 de marzo y detuvo a 32 ocupantes miembros de la organización, que días después recuperaron su libertad con medidas alternativas. UH 20.06.12 Política.

Los líderes carperos José Rodríguez y Atanacio Galeano emitieron un comunicado en nombre de la Fuerza de Integración Popular (FIP) - Liga Nacional de Carperos-. En el mismo manifestaron sentirse víctimas del terrorismo de Estado instalado en el país. La FIP manifiesta su más enérgico repudio a la absoluta falta de voluntad política del presidente Fernando Lugo, para encarar con seriedad siquiera el inicio de la solución al grave y endémico problema de la tierra en el Paraguay, que fuera una de sus principales promesas electorales, dice el comunicado. Repudia también “la actitud criminal de los personeros del Partido Colorado, responsable este por más de 60 años de despojo y saqueo de las riquezas naturales del país, fundamentalmente la tierra, la que fue traficada y entregada ilegalmente a brasileños y allegados al oprobioso régimen del dictador colorado Alfredo Stroessner, dejándonos la herencia maldita de más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas”. Condena al Poder Judicial del Paraguay, “que se ha convertido en un antro de corrupción y

un simple mercado donde se trafican públicamente y con todo desparpajo, coimas de por medio, sentencias y resoluciones”. Manifiesta su preocupación “por la designación del nuevo ministro del Interior, al colorado Rubén Candia Amarilla, entrenado por el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia en las técnicas de terrorismo de Estado, cuyo blanco y objetivo principal en el Paraguay son las organizaciones campesinas y sociales consideradas peligrosas a los intereses de la corrupta oligarquía latifundiaría”. ABC 21.06.12 Política.

Eulalio López, uno de los máximos dirigentes de la Liga Nacional de Carperos, fue detenido en una barrera de control policial en el departamento de San Pedro. El arresto del dirigente carpero fue calificado por organizaciones sociales y políticas de izquierda como inicio de una persecución contra la organización, muy ligada al gobierno del presidente Fernando Lugo, recientemente destituido tras un juicio político en el Congreso. Contra López pesaba una orden de captura del 2006, firmada por el juez Fernando Benítez, por “perturbación de la paz pública y otros delitos”, tras un cierre de rutas. López dijo que su detención es “parte de una persecución a los carperos por parte del gobierno golpista” de Federico Franco.

Tras ser detenido, López fue remitido a la cárcel regional de San Pedro. La LNC en contra del apresamiento de López. La organización repudia lo que considera un “plan de descabezamiento de la LNC y demás organizaciones sociales, en lucha por sus reivindicaciones históricas, y responsabiliza al ilegítimo gobierno de Franco por las consecuencias que puedan derivar de esta escalada de violencia”. ABC 29.06.12 Economía/ UH 29.06.12 Política.

FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (FNC)

La FNC no tiene pensado manifestarse a favor ni en contra del juicio político al presidente Fernando Lugo, ya que considera que el mismo obedece a una “pelea de intereses”. Así lo manifestó Marcial Gómez, secretario general adjunto del referido gremio. Gómez aseguró “el juicio político a Fernando Lugo es una lucha de intereses entre dos sectores y que no modificará absolutamente en nada la situación del campesino. El problema de fondo es el mantenimiento del latifundio y la falta de la Reforma Agraria. Ese es un tema central y en este momento con el planteo de juicio político o la defensa del Presidente actual, se mete en el debate nacional una cuestión administrativa, que es más bien una pelea de intereses, pero no se discute el

problema de fondo”, sostuvo el dirigente de la FNC. “Con el gobierno de Lugo no hubo ningún avance en materia de desarrollo agrario y ese es el problema de fondo que debe tratarse como emergencia nacional”, aseguró Gómez. ABC 22.06.12 Política.

El dirigente carpero, José Rodríguez, calificó de legal, pero ilegítimo al gobierno del presidente Federico Franco. “Es legal, pero carece de legitimidad, fue una artimaña creada por colorados que siempre son buenos en intriga”, afirmó. Acusó a la ANR de tener supuestamente injerencia en la matanza entre campesinos y policías en Curuguaty, que fue el detonante del juicio político que causó la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. “Nosotros creemos que fueron los colorados que provocaron todo lo de Curuguaty y usaron eso para el juicio político”, dijo, y señaló que la masa popular no acepta el actual Gobierno. Agregó que “para Federico Franco, los carperos siempre fuimos delincuentes comunes, siempre estuvo en contra de la lucha social, siempre fuimos blanco de sus críticas”. Señaló que ahora temen que los ataques a las luchas sociales sean más violentos y que en los desalojos se utilicen siempre la represión policial. El dirigente afirmó que no provocarán ningún hecho de violencia y que aguar-

darán resultados. Rodríguez recalcó que no hay otra salida que esperar lo que hace Franco, y si viene con ataques a la lucha campesina habrá más violencia, advierte. ABC 24.06.12 Economía.

La FNC expresa que el centro del problema en el Paraguay es la persistencia del latifundio y su defensa de parte del Estado. Dice que el Estado, a través de sus instituciones, actúa en defensa del latifundio que es la principal causa de la miseria, desocupación y situación de pobreza en que vive la mayoría de la población paraguaya.

Considera que como parte de la defensa del latifundio es que las fuerzas represivas vienen asesinando a campesinos que luchan por un pedazo de tierra. Menciona como ejemplo a los cuatro campesinos asesinados en un desalojo ocurrido en el año 2000 en General Resquín, departamento de San Pedro. Recuerda que a lo largo de su historia gremial, la FNC ha defendido un modelo de desarrollo que los gobiernos de turno han desatendido. ABC 16.06.12 Política.

ORGANIZACIÓN NACIONAL CAMPESINA (ONAC)

La ONAC está en contra de este gobierno (Federico Franco), pero de todas maneras seguirá cooperando con

el Ministerio de Agricultura (MAG) y las otras instituciones del Ejecutivo para tratar de mejorar la situación campesina, dijo su líder, Angel Giménez. La ONAC considera que la destitución del presidente Fernando Lugo fue un golpe parlamentario, pero el país debe seguir adelante y no se puede castigar al campesino por la crisis política; por eso seguiremos trabajando con el MAG, aseguró Giménez. ABC 29.06.12 Economía.



masivas protestas ante golpe parlamentario



Luego de la masacre en Curuguaty, organizaciones sociales de todo el país se movilizaron para demostrar su repudio ante crisis política desatada con el juicio político al presidente Fernando Lugo y su posterior destitución. En Asunción llegaron unos 400 campesinos para unirse a la manifestación que se realizó frente al Congreso. Formaban parte del grupo de manifestantes, carperos de Ñacunday quienes se opusieron a la destitución de Lugo.

Cerca de 5.000 campesinos e indígenas de distintas localidades del Departamento de Canindeyú se manifestaron frente a la estancia Campos Morombí, donde sin tierras y policías se enfrentaron, dejando un saldo de 17 muertos. La protesta fue por la liberación de los 12 campesinos detenidos por el enfrentamiento fatal con la Policía, por la recuperación inmediata de las tierras de Marina

Cué -que comprenden unas dos mil hectáreas- y por la indemnización a las familias que perdieron a sus miembros en la refriega con la Policía. Eladio Martínez, dirigente del Frente Social y Popular de Curuguaty, estimó que unos 3.000 campesinos de distintas colonias de la ciudad llegarán hasta Asunción. "Nosotros apoyamos el proceso democrático que inició Fernando Lugo. Los par-

lamentarios quieren hacer rápido el juicio político porque quieren instaurar una dictadura parlamentaria, que en realidad fue lo que siempre hicieron", expresó Eladio Martínez. UH 22.06.12 Política.

Nacionales

La Federación Nacional Campesina (FNC) realizó una protesta frente al MAG, con objeto de exigir la provi-

sión de camiones para la comercialización del algodón. Teodolina Villalba y Marcial Gómez, secretaria general y secretario general adjunto de la FNC, señalan que la provisión de camiones para transportar la cosecha algodonera de los asentamientos a las desmotadoras fue un compromiso asumido por el MAG al inicio de la zafra, en el marco de un convenio con la Federación, que incluye la reproducción de la semilla de la variedad nacional, realizada por los agricultores. Los labriegos lamentaron el desinterés del Estado y específicamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para reactivar la producción agrícola, ya que prácticamente abandonaron a su suerte a los campesinos. La respuesta de la cartera de Estado fue que tienen combustible para dos semanas de operación de los camiones, mientras que el gremio de referencia espera al menos tres o cuatro semanas, atendiendo a que se deben trasladar alrededor de 500.000 kilos de algodón. La FNC aprovechó la ocasión para insistir sobre la necesidad de tener un seguro agrícola, porque el pequeño productor está expuesto a situaciones desfavorables, como la sequía y otros fenómenos naturales, que de ocurrir perjudica a cientos de compatriotas. ABC 25.04.12 Economía.

Unos 400 campesinos llega-

ron a Asunción para formar parte de la manifestación realizada frente al Congreso, en contra del juicio político al ex presidente Fernando Lugo. El grupo estaba compuesto por carperos de Ñacunday, Alto Paraná, Caa-guazú y San Pedro, entre otros lugares. “Nosotros los carperos de Ñacunday no somos violentos, pero creemos que la destitución de Fernando Lugo fue un golpe de Estado”, opinó el dirigente Federico Ayala. Agregó que el cambio de Lugo fue montado por el senador Juan Carlos Galaverna. ABC 24.06.12 Economía.

Regionales

Unos 100 usuarios de la Asociación de Campo Comunal de Costa Irala del distrito Quiindy (Paraguarí) se manifestaron frente a la fiscalía local para solicitar al representante del Ministerio Público, Geraldino Casal, el cese de persecución que sufren unos 20 pobladores. Los afectados fueron denunciados por Gustavo Raúl Dos Santos por el supuesto hecho de invasión a la propiedad y coacción. El fiscal aseguró que está atendiendo la denuncia presentada por Dos Santos y que “solo porque se manifiesten” no va a suspender la investigación. El denunciante, en marzo último, mediante orden judicial tomó posesión de unas 50 hectáreas de un inmueble, que los

lugareños reclaman como campo comunal. La propiedad habría sido titulada dos veces por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actualmente INDERT. Esto permitió que se despoje a los usuarios de una parte del campo comunal, según el presidente de la organización, Demetrio Barrios. El director de Campos Comunales del INDERT, Óscar Rodríguez, manifestó que el ente agrario judicializó el caso, pero la justicia le favoreció a Dos Santos. Alegó que esas tierras ya no serán reclamadas institucionalmente y que queda a cargo de los usuarios del campo comunal iniciar un juicio contra Dos Santos. ABC 26.04.12 Interior.

Unos 100 pobladores de diferentes barrios de la ciudad de Salto del Guairá (Canindeyú) temen ser desalojados de los inmuebles que ocupan. Los afectados se manifiestan frente a la Municipalidad y el Juzgado para pedir apoyo ante la posibilidad de ser expulsados de sus viviendas. Los propietarios de los terrenos que ocupan iniciaron acciones judiciales para recuperar la posesión. Según el dirigente local del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Fausto Notario, los miembros de la Junta Municipal les brindan su respaldo y se comprometen a declarar de interés social las ocupaciones amenazadas. Agrega que iniciarán accio-

nes para legalizar las ocupaciones, ya que tienen derechos adquiridos por los años de ocupación de los inmuebles. Explica que las demandas concretas son pocas, pero en la ciudad hay más de 1.000 familias residiendo en propiedades privadas, que fueron ocupadas hace más de diez años. En todo ese tiempo, los terrenos fueron vendidos y revendidos en forma irregular, sin que los poseedores de títulos reaccionen. Muchos lugares que hace una década eran considerados impropios para habitar, actualmente están muy cerca de grandes shoppings y galerías, motivo por el que adquirieron gran valor comercial. ABC 29.04.12 Interior.

Más de mil personas integrantes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y de la Coordinadora Departamental por la Emergencia de Alimentos del departamento de Alto Paraná, así como organizaciones del departamento de Itapúa e integrantes de la Coordinación Nacional de Emergencia Campesina e Indígena del departamento de Cordillera, se manifestaron para exigir el cumplimiento del Decreto 8282/12 del Poder Ejecutivo, por el cual se establece un plazo de tres meses para la emergencia alimentaria, periodo en el cual el Gobierno debe proporcionar alimentos y semillas a las familias más carenciadas. Por su parte,

campesinos de varios distritos de la zona noreste de Itapúa, bloquearon el tránsito vehicular. Daniel Duarte, vocero de los manifestantes, expresó que pretenden que el plazo del estado de emergencia se extienda hasta el mes de noviembre, y exigen un plan de reforma agraria integral, que comprenda el desarrollo sustentable de las familias campesinas. El mismo cuestionó la falta de atención, tanto del Gobierno central como de los municipios. ABC 09.05.12 Economía.

La Liga Nacional de Carperos (LNC) de la colonia Agüerito, de Yaguareté Forest (San Pedro), realizó una marcha en el lindero del inmueble de Ulisses Rodríguez Teixeira en la localidad de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). En un breve acto cerca de un retiro del establecimiento, resolvieron emplazar por 15 días al Gobierno para la compra de 7.800 hectáreas, de las 22.000. Advertieron que la espera terminó y que comenzó de nuevo la guerra por conseguir el inmueble. Durante la marcha, José Bordón, uno de los dirigentes de la zona, explicó que la razón de la movilización es detener los delitos ambientales que se están cometiendo en la estancia. También reclamaron que los guardias de Teixeira son civiles armados. "El Gobierno debe cumplir con su compromiso y adquirir las tie-

rras", expresó. Finalmente, los campesinos quedaron bajo carpas frente al inmueble de Teixeira y amenazaron con ocupar la propiedad si dentro de 15 días no se inicia la compra del inmueble. Sin embargo Teixeira sostuvo que el inmueble ya no está a la venta. ABC 15.05.12 Interior.

Cerca de 5.000 campesinos e indígenas de distintas localidades del Departamento de Canindeyú se manifestaron frente a la estancia Campos Morombí, donde sin tierras y policías se enfrentaron, dejando un saldo de 17 muertos. La protesta fue por la liberación de los 12 campesinos detenidos por el enfrentamiento fatal con la Policía, por la recuperación inmediata de las tierras de Marina Cué -que comprenden unas dos mil hectáreas- y por la indemnización a las familias que perdieron a sus miembros en la refriega con la Policía. Eladio Martínez, dirigente del Frente Social y Popular de Curuguaty, estimó que unos 3.000 campesinos de distintas colonias de la ciudad llegarán hasta Asunción. "Nosotros apoyamos el proceso democrático que inició Fernando Lugo. Los parlamentarios quieren hacer rápido el juicio político porque quieren instaurar una dictadura parlamentaria, que en realidad fue lo que siempre hicieron", expresó Eladio Martínez. UH 22.06.12 Política.

mueren once sin tierras en curuguay



Once campesinos sin tierras y seis policías del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) murieron en enfrentamiento en una propiedad del ex senador colorado Blas N. Riquelme. Ocurrió a 35 kilómetros del centro de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú. El operativo de desalojo estaba a cargo de un contingente de 250 efectivos del GEO, pelotones antidisturbios y

personal de orden público.

La comitiva fue acompañada por los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar, quienes tenían en su poder una orden de allanamiento firmada por el juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez. Luego de 30 minutos de consecutivos enfrentamientos, los campesinos sobrevivientes huyeron hacia

el fondo de la propiedad y se perdieron en medio del monte. Después de trascender el hecho, la cúpula policial ordenó reforzar el operativo con personal de las jefaturas aledañas y de Asunción. ABC 15.06.12 Política.

La estancia Morombí es reclamada por los sin tierra desde el 2004, cuando campesinos denunciaron masiva

deforestación en el lugar. En 2008, unas 500 familias ocuparon la propiedad y fueron desalojadas en dos ocasiones. Este año desde los primeros días de enero se producían fuertes pujas por la tierra. El Ministerio del Interior, ya a cargo de Carlos Filizzola, el 12 de enero envió un contingente de 200 policías para desalojar a los tres grupos que estaban asentados en diversos puntos de la propiedad. Pero pocos días después volvieron a ingresar unas 500 familias. En febrero, los ocupantes intentaron tomar la fiscalía de Curuguaty. Tras el hecho, fue imputado el intendente local, Ramón Vega (PLRA), por ser uno de los supuestos investigadores. En mayo se reagruparon y entraron nuevamente a Morombí, lo cual desembocó en la tragedia con más de 16 muertos. ABC 16.06.12 Política.

Las instituciones mencionadas y la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) sostienen que el inmueble en cuestión fue donado por La Industrial Paraguaya SA al Estado paraguayo, siendo aceptada esta donación por Decreto 29366 del 6 de setiembre de 1967, y, por Decreto 3532, el Estado paraguayo incluso lo declaró de interés social y lo destinó para la reforma agraria, transfiriendo la propiedad al Indert a título gratuito. El INDERT planteó en el 2004 un juicio de mensura

sobre las tierras, pero actualmente el juicio está varado en la Cámara de Apelaciones por otra acción interpuesta por la empresa de Riquelme, según manifestó el interventor del INDERT, Emilio Camacho.

La empresa administra la zona como una reserva natural privada, reconocida en el año 2001 mediante el Decreto n.º 14910 del Poder Ejecutivo, que reconoce la Reserva Natural Privada Morombí como un área relevante para la protección de la diversidad biológica del ya amenazado Bosque Atlántico del Alto Paraná. La Procuraduría presentó una acción autónoma de nulidad en el 2010 y obtuvo una resolución del juez Alberto Martínez Simón, para que la empresa no disponga del terreno. El informe de la Comisión Verdad y Justicia habla de ciertas irregularidades en el juicio de usucapión que otorgó las tierras a Riquelme. "En el juicio se han observado múltiples irregularidades y falsedades, como el no haber dado intervención a la Procuraduría General de la República ni haber abonado las tasas judiciales en su iniciación", señala el texto del Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. El informe dice que las tierras son del Estado y que el artículo 1993 del Código Civil dice que "las tierras del dominio privado del Estado y de los entes

autónomos del Derecho Público no pueden ser adquiridas por usucapión". Otro dato interesante del informe indica que por escritura pública n.º 675 del 31 de diciembre de 1969, ante el escribano público Ramón Zubizarreta, Riquelme adquirió para su firma Campos Morombí 50.000 hectáreas de La Industrial Paraguaya SA. El Estado, a través de la Procuraduría y el Indert, reclama por vía judicial la propiedad del inmueble de 1.748 hectáreas, alegando que le fue donado por La Industrial Paraguaya hace mucho tiempo. El informe de la Comisión Verdad y Justicia señala otros dos casos de supuestas adquisiciones irregulares de las tierras del ex senador colorado Blas Riquelme; dos lotes en Curuguaty obtenidos del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) por dos personas de la empresa Campos Morombí. En el informe de la Comisión figura que el 6 de noviembre de 1974 Carlos J. Santacruz, por un lado, y Rodolfo Scolari, por otro, (ambos miembros de Campos Morombí) fueron adjudicados por el IBR con 1.155 ha. con 7.832 m² y 1.175 ha. con 138 m², respectivamente, y luego ambas propiedades pasaron a nombre de Riquelme el 23 de abril de 1975. La observación del informe es que la adjudicación violó varios artículos del Estatuto Agrario de entonces, contemplado en

la Ley 854/63, y fundamentalmente señala que ni los adjudicados ni Riquelme eran beneficiarios de la reforma agraria. UH 16.06.12 Política.

Las tierras de la firma Campos Morombí S.A., ubicadas en la colonia Yvyra Pytã, en Curuguaty, donde tuvo lugar la matanza entre carperos y policías, no figuran como propiedad de Blas Riquelme en la Dirección de Registros Públicos, afirmó la titular de la institución, Lourdes González. La finca sigue registrada a nombre de la Industrial Paraguaya S.A.", dijo González. La directora explicó que el inmueble sigue a nombre de La Industrial Paraguaya desde finales del 2010, debido a una acción de nulidad presentada por la Procuraduría General de la República contra el jui-

cio de usucapión que promovió en el 2005 el empresario y político colorado, y que, por lo tanto, fue cancelada una inscripción preventiva de la sentencia de usucapión a favor de Blas N. Riquelme. Las tierras fueron donadas originariamente al Estado por la Industrial Paraguaya, que por Decreto n.º 29.366, en septiembre de 1967, aceptó la donación y las destinó para la reforma Agraria en el 2004, transfiriendo la propiedad a nombre del INDERT. La fracción de unas 2.000 hectáreas se encuentra en disputa entre Campos Morombí SA y Agropecuaria, propiedad de Riquelme, y es reclamada como tierra del Estado por la Procuraduría General de la República, que mediante una acción de nulidad presentada obtuvo una resolución del juez Al-

berto Martínez Simón para que la empresa no disponga del terreno.

Por otra parte, el interventor del INDERT, Emilio Camacho, pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que investigue la actuación de los magistrados y fiscales que estuvieron relacionados al confuso procedimiento que derivó en la matanza. "Queda la duda de cómo un juez o un agente fiscal puede promover la acción de desalojo en una tierra cuyo propietario no está claro y sin cerciorarse de los antecedentes del juicio", señaló el interventor. UH 19.06.12 Política.

El juez de Curuguaty José Benítez ordenó la prisión de los doce campesinos que fueron imputados tras el enfrentamiento mortal registrado entre los sin tierras y agentes policiales en Curuguaty. Así también, dispuso el estado de rebeldía para 46 prófugos que habrían participado del choque sangriento que dejó un saldo de 17 muertos. UH 18.06.12 Política.

Tras el trágico enfrentamiento entre campesinos y policías en Curuguaty, la Corte Suprema de Justicia ordenará un relevamiento de datos sobre la situación en que se encuentren los casos de mensura judicial a nivel país. UH 19.06.12 Política.



cuadro de conflictos

Departamento	Lugar	Año de ocupación	Año de Inicio	Hectáreas	Familias	Situación actual	Observaciones
Caaguazú	San Joaquín	2005	2005	1065	s/d	Ocupación	La propiedad es de indígenas de la comunidad Paraje Puku
Caazapá	San Juan Nepomuceno	2012	2011	s/d	50	Ocupación	La propiedad es de Liz Melgarejo de Silva
Canindeyú	Colonia Yvyra Pytä, Curuguay	2012	s/d	1.198	60	Desalojo	La propiedad pertenece a Blas N. Riquelme. Murieron 11 campesinos y 6 policías.
San Pedro	Colonia Naranjito	2012	s/d	140	39	Ocupación	La propiedad es de Ricardo Ayala y Víctor Penayo.
San Pedro	Estancia Capivara. Compañía Santo Domingo, Guayaybí	s/d	s/d	2.100	s/d	Desalojo	El propietario es Miguel Ángel Montaner.
Presidente Hayes	Puerto Esperanza	2012	s/d	4000	s/d	Ocupación	Ruy Assumpcao Netto

nueva administración de indert asegura reforma agraria



Luego de 90 días de intervención, Emilio Camacho presentó el informe final del INDERT en el que sugirió presentar un proyecto de ley para limitar la venta de tierras públicas para cada propietario, a fin de evitar latifundios. Tras de la destitución de Fernando Lugo, la titularidad del INDERT fue asumida por el Abogado Ignacio Ortigoza. La nueva administración aseguró que se inicia “un nuevo modelo de Reforma Agraria en Paraguay”. Mientras, las publicaciones del Informe de la Comisión Verdad y Justicia continúan percutiendo, luego de fatal conflicto de tierra en Curuguaty. En ese sentido, el informe hace referencia a los casos de supuestas adquisiciones irregulares de las tierras del ex senador colorado Blas Riquelme; dos lotes en Curuguaty obtenidos del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) por dos personas de la empresa Campos Morombí.

Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

El INDERT podrá hacer posible el catastro de todas sus

tierras, tras la reactivación de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación. El proyecto durará dos años y

cuenta con una inversión inicial de 373.290 dólares. La iniciativa prevé la adquisición de los equipos y la capacitación de los funciona-

rios. El convenio técnico fue firmado por los órganos ejecutores de la cooperación, en febrero de 2010. Mediante un acuerdo complementario con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pretende formalizar la reactivación del proyecto. ABC 07.04.12 Economía

El interventor del INDERT, Emilio Camacho, se reunió con sin tierras de la colonia San Juan, del distrito de Francisco Caballero Álvarez, Dpto. de Canindeyú. Les prometió que el Estado recuperará las fincas que están en manos de colonos para entregarles paulatinamente. Según Camacho, en el asentamiento de más de 5.000 hectáreas, entre el 70 y el 80 por ciento de los lotes pertenecen al Estado paraguayo, pese a que ya tiene 17 años de ocupación. “Eso representa una gran ventaja y nos va a facilitar la recuperación de las tierras”, agregó Camacho. El proceso de recuperación de las fincas de San Juan inició el ex presidente del INDERT, Alberto Alderete, quien pretendía unas 160 fincas para los sin tierras de la FNC. Sin embargo, el intento fue en vano, porque los colonos recurrieron a la justicia para mantener la posesión. La misma situación volvería a repetirse con el nuevo intento que inició en INDERT, con Emilio Camacho, ya que la justicia ya tiene resulta la mayoría de las

demandas a favor de los colonos. ABC 19.04.12 Interior.

Italia devolverá al Paraguay las 17.343 hectáreas que posee en el distrito de San Pedro, producto de una donación que había realizado en 1951 el filántropo paraguayo de origen italiano, Dr. Andrés Barbero, al Gobierno de dicho país europeo. El Dr. Barbero donó las tierras de su propiedad a Italia con la intención de que se colonice el lugar con inmigrantes italianos. Pero el proyecto nunca se concretó y con el correr de los años fueron ocupando campesinos que hoy reclaman usucapión. Según la cancillería paraguaya informó que unas 1.500 familias ocupan el inmueble, podrán regularizar su situación legal para que puedan trabajar con tranquilidad. Dentro de las más de 17.000 hectáreas se encuentran campesinos distribuidos en unas 20 compañías. Se estima que unas 15.000 personas habitan las 17.343 hectáreas, según datos extraoficiales. ABC 20.04.12 Política.

Unas 35.000 hectáreas en la localidad de Puerto Casado fueron declaradas por el INDERT colonia de hecho, aunque falta la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Emilio Camacho, interventor del INDERT, dijo que una de las órdenes que recibió del presidente de la República fue respetar la

propiedad privada y dar solución a los problemas de tierra. Señaló además que la dueña real de la tierra, la secta Moon, no se encuentra en el país y que las administradoras, las empresas Atenil SA y Victoria SA, no quieren negociar. Desde el año 2000 Puerto Casado se ha mantenido en la lucha por la tierra propia cuando la secta Moon compró 600.000 hectáreas de tierras del anterior dueño, Carlos Casado, quien explotó los recursos naturales de la región por más una década. Una comitiva encabezada por Camacho y su equipo de asesores se trasladó a la localidad chaqueña para la entrega de la resolución que declara a este lugar colonia de hecho. Los casadeños festejaron la entrega oficial de la resolución como un logro muy importante después de once años de lucha. Por otra parte, el INDERT pagó el 80% del monto global, en concepto de compra de unas 157 hectáreas, vía licitación pública nacional (LPN), ubicada en el distrito de Caaguazú, del mismo departamento. El 20 por ciento restante se hará una vez que el inmueble sea inscripto. UH 28.04.12 Política.

El presidente Fernando Lugo destituyó del Ing. Marciano Barreto de la administración del INDERT. El interventor del ente, Emilio Camacho, explicó que el presidente Lugo aún no tiene a una per-

sona definida para sucederlo en el cargo. Camacho dijo que su intervención está concluida en un 90%, que se recuperaron 60.000 hectáreas en el Chaco y que aún quedan muchas por verificar. La intervención fue ordenada por la Presidencia de la República luego de una serie de indicios de irregularidades detectadas en la venta de tierras en el Chaco. ABC 09.05.12 Nacionales.

El INDERT, por disposición del Dr. Emilio Camacho, ordenó la intervención de inmuebles que corresponden a desprendimientos de la finca 4036, afectando a colonias agrícolas administradas por el mismo instituto agrario, en el Alto Paraná. Posteriormente amplió la determinación al resto de la finca 4036, inmueble que pertenece a Tranquilo Favero. El juez Hugolino Bogado Medina, del distrito de Iruña, dictó una orden de no innovar que afecta inclusive a las mismas colonias agrícolas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el juez Hugolino Bogado Medina no es competente en el caso que afecta a la finca 4036. El caso debe ventilarse en Santa Rita por una cuestión de jurisdicción. ABC 10.05.12 Política.

Tras la destitución de Marciano Barreto del INDERT, el presidente Fernando Lugo informó que nombrará un

equipo de profesionales compuesto por 4 o 5 personas que terminarán la labor de intervención hasta agosto del 2013. Sostuvo que la intención es que un equipo de técnicos y profesionales pueda corregir los hechos de corrupción que fueron publicados por el interventor, Emilio Camacho. Lugo dijo que el INDERT hasta hoy no pudo cumplir con su misión principal que es la de facilitar la creación de colonias rurales, según se desprende de los archivos de la institución. El mandatario remarcó que la auditoría realizada demuestra que los pequeños productores quedaron en segundo plano y finalmente facilitó la creación de latifundios. UH 12.05.12 Política.

La población de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, realizó un festejo por el logro obtenido después de más de 11 años de lucha por la tierra, al recibir la declaración de colonización de hecho por parte del INDERT. La fiesta se realizó en el tinglado de la parroquia de Puerto Casado donde hubo también actuaciones de cantantes de la capital como Humbertico y Urbano y artistas locales. Emilio Camacho, asesor del INDERT, comentó que los trámites de inscripción en el registro de propiedades están por buen camino y que un juzgado de primera instancia ya ordenó la inscripción de las 35.000

hectáreas. UH 18.05.12 Metropolitana-Interior.

El interventor del INDERT, Emilio Camacho, entregó su informe final y sugirió al presidente Fernando Lugo presentar un proyecto de ley para limitar la venta de tierras públicas para cada propietario, a fin de evitar latifundios. Dijo que la mayoría de las 1.200 colonias creadas desde hace 50 años están abandonadas. Anunció que seguirá en la institución hasta que el Jefe de Estado nombre al titular. El 28 de febrero pasado, Camacho comenzó a trabajar como interventor del INDERT en sustitución de Marciano Barreto, quien no habría cumplido el cometido de sanear la institución que arrastra serias irregularidades desde que el Estado paraguayo comenzó a controlar legalmente las tierras públicas a principios del siglo XVII. Enumeró una serie de irregularidades y recomendación en el informe final presentado al presidente Lugo, como la necesidad de limitar la cantidad de tierras públicas que se puede vender a cada propietario, a fin de evitar los latifundios. Recordó que el Paraguay tuvo una legislación que limitaba la tenencia de las tierras, pero se derogó en 1973, lo que dio pie a rifar las tierras chaqueñas fronterizas. Recién en el 2005 se volvió a tener una ley de franja fronteriza, añadió Camacho. La mayoría de

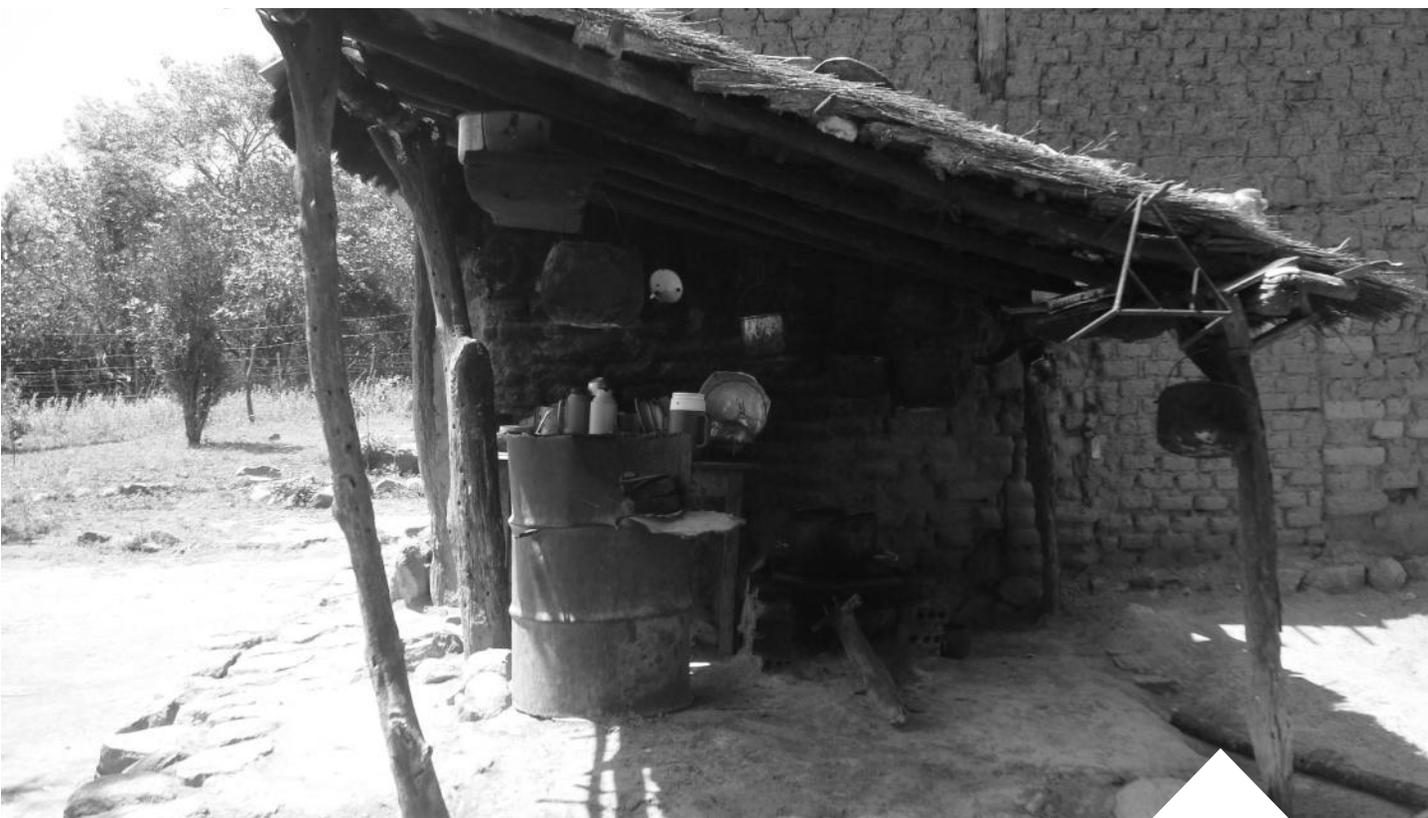
las 1.200 colonias creadas por IRA, IBR y ahora INDERT, nacieron hace más de medio siglo, pero la mayoría de ellas están abandonadas, recordó en su informe. Comentó que las colonias Ñacunday I y II se asentaron sobre la base de tierras de origen fiscal en 1973. Pero las colonias nunca se concretaron y se presume que la intención real era entregar a “personajes cercanos al gobierno de la época (Stroessner)”, indicó. La intervención del INDERT duró 90 días y el informe presentado tiene unas 90 páginas. ABC 09.06.12 Economía.

Comisión Verdad y Justicia

El informe de la Comisión

Verdad y Justicia señala otros dos casos de supuestas adquisiciones irregulares de las tierras del ex senador colorado Blas Riquelme; dos lotes en Curuguaty obtenidos del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) por dos personas de la empresa Campos Morombí. En el informe de la Comisión figura que el 6 de noviembre de 1974 Carlos J. Santacruz, por un lado, y Rodolfo Scolari, por otro, (ambos miembros de Campos Morombí) fueron adjudicados por el IBR con 1.155 ha. con 7.832 m² y 1.175 ha. con 138 m², respectivamente, y luego ambas propiedades pasaron a nombre de Riquelme el 23 de abril de 1975. La observación del informe es que la

adjudicación violó varios artículos del Estatuto Agrario de entonces, contemplado en la Ley 854/63, y fundamentalmente señala que ni los adjudicados ni Riquelme eran beneficiarios de la reforma agraria. El texto cita el artículo 2 donde se preconiza el rol social y señala como beneficiarios a la población campesina y, por otro lado, como no beneficiarios, citando el artículo 15, a propietarios de tierras rurales, como era Riquelme. "Las adjudicaciones hechas por el IBR y los respectivos títulos de propiedad son nulos de nulidad insanable. Así deben ser declarados por el juez para que luego los inmuebles vuelvan al dominio del Estado", sentencia. UH 16.06.12 Política.



reinicio de actividades en caazapá



En el marco del Programa de Fortalecimiento e incidencia de las organizaciones campesinas 2012 se reinició los trabajos de acompañamiento en las comunidades de Oro Kúí, 11 de Mayo y Tavaí, de Caazapá. La primera visita del año consistió en jornadas de planificación para el segundo semestre del año. Los y las beneficiarios/as se mostraron entusiasmados/as de continuar con los trabajos que se viene realizando. En las tres comunidades coincidieron en la necesidad de profundizar los trabajos de capacitación y acompañamiento. La planificación se basó principalmente en la disponibilidad de las organizaciones, teniendo en cuenta sus propias agendas de actividades para el resto del año.



El día 13 de junio se inició la reunión con campesinos y campesinas de la localidad de Ñu Pyahu, distrito de Tavaí. En la oportunidad, participaron 10 varones y 20 mujeres.

El día 14 de junio se realizó el encuentro con pobladores y pobladoras de la localidad de Oro Ku'i, con la participación de 13 mujeres y 5 varones.

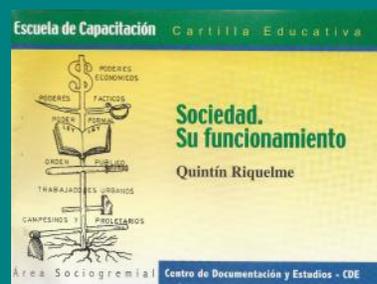
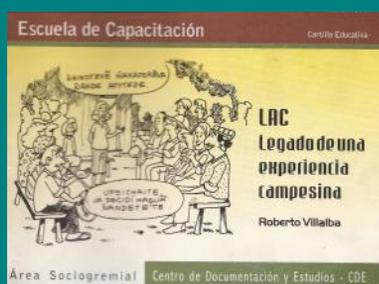
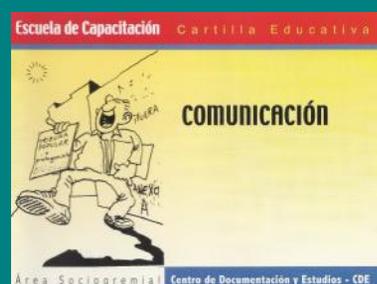
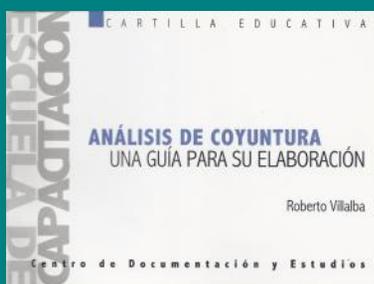
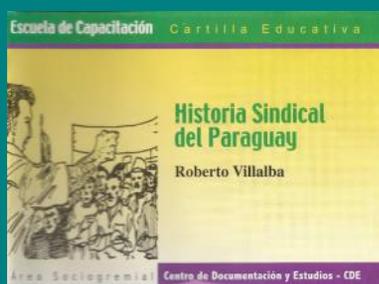


El 15 de junio se realizó la jornada de planificación en la comunidad de 11 de Mayo. Participaron del encuentro 18 mujeres y 15 varones.

informativo campesino

Esta es una publicación trimestral que ofrece análisis, comentarios y un panorama de los hechos que afectan al sector campesino. Utiliza como fuente los periódicos del país, los boletines de distintas organizaciones e investigaciones propias. Realizamos canjes. El pago de la suscripción cuando es realizado en cheque, debe estar a nombre del Centro de Documentación y Estudios.

publicaciones:



pedidos al:

Centro de Documentación y Estudios
Cerro Corá 1426 e/ Pai Pérez y Perú
Tel.: 225 000 / 204 295
Fax: 595 21 213 246
www.cde.org.py
Casilla Postal: 2558
Email: cde@cde.org.py
sociogre@cde.org.py
Asunción, Paraguay

tarifa de suscripción 4 números

	INDIVIDUAL	INSTITUCIONAL
Paraguay	Gs. 130.000	Gs. 150.000
América Latina	USD. 50	USD. 50
Resto del Mundo	USD. 60	USD. 60

precio del ejemplar: Gs. 25.000.-

Impreso Franqueo a Pagar
Res. N° 211/00/D/SG
Tarifa Reducida
Resolución 47/2008/DC/SG

